

TÍTULO:	ANÁLISIS FODA DEL SISTEMA ACUSATORIO
AUTOR/ES:	Catalano, Mariana
PUBLICACIÓN:	Erreius on line
TOMO/BOLETÍN:	-
PÁGINA:	-
MES:	Agosto
AÑO:	2023

MARIANA CATALANO<sup>(1)</sup>

ANÁLISIS FODA DEL SISTEMA ACUSATORIO  
A 4 AÑOS DE SU ÚNICA IMPLEMENTACIÓN FEDERAL

I - INTRODUCCIÓN

El 10 de junio de 2019 se implementaba en la jurisdicción federal de Salta y Jujuy el sistema acusatorio, regido por el [Código Procesal Penal Federal](#) (CPPF, [L. 27063](#) con la reforma de la [L. 27482](#)). A 4 años de esta experiencia, única (por el momento) en el país, se impone un análisis estratégico de este cambio disruptivo en la litigación penal federal.

Emplearé la metodología FODA (Fortalezas/Oportunidades/Debilidades/Amenazas) surgida en la década de 1960 en el Instituto de Investigación de Stanford para la planificación corporativa.

Luego de su presentación en cuadro como elemento inherente a este tipo de estudio, que permite la mejor visualización y comprensión de su contenido, lo desarrollaré punto por punto, sin pretensión de agotar todos los aspectos.

<b>FORTALEZAS</b> * Justicia como institución humana y abierta. * Eficacia derivada de la separación de funciones. * Versatilidad frente a los distintos niveles de criminalidad.	<b>OPORTUNIDADES</b> * Adquirir perspectivas: a) del delito como conflicto; b) del tiempo como factor condicionante; c) de una ética del vulnerable. * Aplicar selectivamente el derecho penal. * Crear una unidad de análisis “judicial”.
<b>DEBILIDADES</b> * Competencia múltiple en los distritos del interior. * Revisión colegiada de las medidas cautelares. * Falta de reglamentación integral sobre cuestiones operativas.	<b>AMENAZAS</b> * Quedar en soledad. * Amesetamiento de las causas en instancia de recurso extraordinario. * Falta de medición social y diálogo interinstitucional.

II - FORTALEZAS

1. Justicia como institución humana y abierta

El sistema acusatorio convierte a la Justicia en una institución abierta que expone su trabajo *en persona*, porque visibiliza al juez, que dirige las audiencias en presencia de los litigantes profesionales, el imputado y la víctima, y que goza de amplio derecho a intervenir a lo largo del proceso.

En este sentido, el sistema garantiza que el magistrado reciba información de primera fuente, es decir, directo de las partes, y entonces pueda controlar su calidad y tomar decisiones sin intermediarios. Lo contrario a lo que ocurre en el sistema mixto, en el que la estructura de las Secretarías Penales suple gran parte de lo que ahora es una tarea insustituible del juez.<sup>(2)</sup>

Ello decanta en una justicia *más humana y menos delegada*, con magistrados accesibles que van a escuchar al imputado y a la víctima cuando deseen intervenir, y que van a captar la esencia del conflicto porque, en vez de leerlo, lo vivencian. Que tendrán que comunicar sus decisiones en lenguaje claro, porque ahí están sus principales interesados, a quienes debe llegar su mensaje.

Salvo restricciones temporales y fundadas, las audiencias son de acceso al público en general, y el artículo 287 del CPPF brinda igual trato a los medios de prensa, sin mayores recaudos, para que puedan informar a la sociedad lo que va ocurriendo en la sala de juicio.

Todo esto, innegablemente, satisface los postulados de gobierno abierto y acceso a la justicia que ambiciona las Naciones Unidas en sus ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 2030.

2. Eficacia derivada de la separación de funciones

En el nuevo esquema funcional, los jueces están ocupados exclusivamente de la tarea jurisdiccional, ya no asumen la investigación, y se desentienden de la gestión y cronograma de las audiencias.

**División de tareas con el Ministerio Público Fiscal**

Abona la imparcialidad como sostén del sistema acusatorio, lo que viene ordenado por todo el conjunto normativo, desde la Constitución Nacional y tratados internacionales obligatorios hasta dispositivos de *soft law*, como las Reglas Bangalore (Viena 2009), que postulan *"la imparcialidad no solo a la decisión en sí misma, sino también al proceso mediante el cual se toma esa decisión"*.

La Corte Interamericana ha señalado que la independencia judicial *"constituye uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas las áreas del procedimiento y ante todas las instancias procesales en que se decide sobre los derechos de la persona"* <sup>(3)</sup>. Además, considera que debido a que la independencia judicial *"resulta indispensable para la protección de los derechos fundamentales"*, debe garantizarse inclusive en situaciones especiales, como el estado de excepción. De igual forma, el Comité de Derechos Humanos ha reiterado que el derecho a un tribunal independiente e imparcial es un *derecho absoluto que no admite excepciones*. <sup>(4)</sup>

### **División de tareas con la Oficina Judicial**

Las estadísticas de estos 4 años demuestran un 100% de eficacia en la gestión de audiencias, lo que comprende las notificaciones de todas las partes (lo que resulta trabajoso cuando hay varios imputados, defensas privada y pública, querella, etc.), chequear la disponibilidad de espacio en las respectivas Salas, el funcionamiento del sistema de grabación, las conexiones multimedia cuando son virtuales, etc.

En el período que va del 10/6/2019 al 31/5/2023 se solicitaron a la OFIJU de Garantías y Revisión de Salta (que comprende subsedes en Jujuy, Orán y Tartagal) 8.517 audiencias, de las cuales se realizaron 8.745, pero dicha diferencia obedece a desistimientos de las partes. Es decir que no existieron encuentros fracasados. <sup>(5)</sup>

### **3. Versatilidad**

El sistema acusatorio permite brindar una respuesta concreta a la sociedad en todos los niveles de *criminalidad*:

#### **Sencilla**

Son los casos que normalmente prescriben en el sistema acusatorio, porque no tienen la presión de las medidas cautelares restrictivas de la libertad (o sea, son causas sin preso) y enfrentan una conminación de pena menor, susceptible de ejecución condicional, como supuestos no agravados de encubrimiento y tentativa de contrabando de mercaderías y divisas, atentado y resistencia contra la autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, etc.

El sistema da cuenta de un importante volumen de suspensiones de juicio a prueba, precedidas de la declaración de inconstitucionalidad del [artículo 76 bis del Código Penal](#) cuando se endilgan los referidos ilícitos del [Código Aduanero](#). <sup>(6)</sup>

Me interesa subrayar, además, que muchos de estos procesos culminaron en sobreseimiento gracias a la verificación de las reglas de conducta, y que, de nuevo de cara a la comunidad, estos cumplimientos han representado devoluciones concretas a sectores necesitados mediante donativos y trabajo no remunerado en centros de salud, comedores, merenderos, comunidades originarias, escuelas, fundaciones, municipios, hospitales, organizaciones no gubernamentales, parques nacionales, capillas, centros vecinales y de salud, unidades carcelarias, etc.

De acuerdo a las mediciones de estos 4 años se computan:

- donaciones en dinero: un total \$ 5.964.132;
- donaciones en especie: \$ 757.262,40, y
- cantidad de horas en tareas comunitarias: 15.502 horas. <sup>(7)</sup>

#### **Media**

Típicos eventos de tráfico de estupefacientes, en cualquier modalidad, en los que suele detectarse la intervención de los eslabones más bajos en situaciones flagrantes. Aunque, vale advertir, este tipo de trámite no es el corrientemente utilizado, y los números de estos 4 años lo demuestran: 2.712 procesos ordinarios en comparación a 125 casos de flagrancia (art. 328 y ss., CPPF).

#### **Criminalidad organizada**

Respecto de narcobandas y grupos criminales sofisticados, la investigación a cargo de Fiscalías especializadas ha demostrado profundidad para llegar a eslabones más altos, para lo cual ha sido frecuente el empleo de técnicas especiales de investigación (TEI, art. 182 y ss., CPPF). Por lo demás, el digesto autoriza a duplicar los plazos cuando se trata de un crimen judicialmente declarado como complejo (art. 334, CPPF), aunque no ha sido una necesidad generalizada en este ciclo, porque de un total de 2.712 procesos ordinarios, tan solo 8 han sido declarados como tales.

Mención aparte merecen algunos casos paradigmáticos de corrupción y crimen organizado que no solo fueron debidamente resueltos, sino que lo fueron con una celeridad notable, acorde a la oralidad del sistema, literalmente imposible para el modelo mixto:

- Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): sucesivas causas involucraron alrededor de 60 miembros de distintos Concejos Deliberantes de Salta (cargos electivos municipales) por cobro o intento de cobro indebido de este beneficio extraordinario dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para paliar las consecuencias del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) en virtud de la pandemia COVID-19, en abril de 2020. Entre ellos se condenó a 5 concejales por defraudación a la Administración Pública e incumplimiento de deberes de funcionario y se celebraron 47 acuerdos con medidas alternativas de resolución de conflictos que implicaron donaciones y la inhabilitación para presentarse a elecciones. <sup>(8)</sup>

- Causa "Prado", robo de 35 kilómetros de caño del gasoducto Nea, proyectado para abastecer a 5 provincias del noreste del país (obra pública paralizada), que tuvo como coautor al intendente de la localidad de Aguaray, que desafectó los caños mediante acto administrativo, lo cual posibilitó su posterior sustracción. Se arribó a condena el 2/12/2021, luego de 6 meses del control de la acusación, y la sentencia fue confirmada en Casación el 7/7/2022.<sup>(9)</sup>
- Causa "Navarro", en la que se ventiló el transporte de gran cantidad de droga (230 kilos de cocaína de alta pureza) por parte de una organización criminal. El 19/5/2022 se desarticuló a toda la organización, que ya estaba identificada a partir de las tareas de campo e intervenciones telefónicas y en la que participaba un miembro de la peligrosa y violenta banda de "Los Monos", radicada en Rosario, Provincia de Santa Fe. Los hechos merecieron condena del Tribunal Oral N° 1 de Salta el 23/5/2023, es decir, tan solo un año después. Constituye el precedente más significativo de condena narco en el sistema acusatorio, con penas de 13 y 12 años de prisión.<sup>(10)</sup>
- Delito de trata de personas triplemente agravado, por haberse cometido mediante intimidación, por ser los imputados ministros de un culto religioso (umbanda) y por haberse consumado la explotación, *en concurso real* con el delito de lesiones leves, en perjuicio de la *víctima 2* -causa "Jorge Soria Villalba - María Ester Arroyo"<sup>(11)</sup>-. El control de acusación se llevó a cabo el 27/9/2022 y la condena recayó tan solo 7 meses después, el 18/4/2023.
- Secuestro extorsivo del dueño de la empresa "El Condor", causa "Campos, Franco Gerónimo y otros": el control de acusación se llevó a cabo el 15/6/2022, seguido de la condena (a 3 de los 4 imputados) por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta el 6/2/2023, a tan solo 7 meses. Luego, el 31/5/2023 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó parcialmente la sentencia (revocó la absolución del cuarto sujeto implicado).<sup>(12)</sup>
- Exacciones ilegales, causa "Víctor Martín Muñoz y otros", gendarmes que exigían dinero o parte de la mercadería a las personas que ingresaban al puesto de control. El Tribunal Oral N° 2 de Salta los condenó el 15/11/2021<sup>(13)</sup>, lo que fue confirmado en Casación el 4/4/2022.

Con respecto a las referidas técnicas especiales de investigación (TEI), las más empleadas son la entrega vigilada (respecto a la modalidad de transporte de estupefacientes en encomienda) y los acuerdos de colaboración ("arrepentido"), que incluso impactan en la pena de los acuerdos de juicio abreviado. Por ejemplo, causa "Diego, Adrián Epifanio"<sup>(14)</sup>, en la que verificada la utilidad y pertinencia de la información vertida por este imputado, se lo condenó el 8/6/2023 como coautor del delito de transporte de estupefacientes a 3 años de prisión de ejecución condicional.

### III - OPORTUNIDADES

#### 1. Adquirir perspectivas

##### a) Del delito como conflicto

El artículo 22 del CPPF plantea el delito no solo como una infracción a la ley penal, sino como conflicto, y en consecuencia, hay un mandato de componer en la medida de lo posible, siempre dentro de los límites legales que establecen topes (normalmente de máxima) para acceder a ciertos beneficios como la *probation* o los procesos abreviados.

La praxis hasta aquí demuestra que estas vías tempranas de fuga del proceso inciden sustancialmente en la eficiencia del sistema, no solo porque ponen rápido término a la persecución penal de los respectivos hechos delictivos, sino también porque preservan el juicio para los casos más difíciles o para aquellos que por la escala penal (normalmente, figuras agravadas) no admiten suspensiones del juicio a prueba o condenas abreviadas. En lo que va de la implementación, *solo el 14,81% de las causas formalizadas llega a debate*.

En cuanto a la oportunidad de plantear estas vías "negociadas", entiendo que un buen momento es el control de acusación (art. 279, CPPF), porque entonces la defensa ya tuvo acceso al legajo fiscal (lo que ocurre luego de formalizada la investigación: art. 230, penúltimo párrafo, CPPF) y conoce los elementos de cargo como para decidir su estrategia defensiva: si va a juicio a pelear una absolución o si el conjunto de evidencias es tan contundente que le conviene acordar la responsabilidad y la pena.

##### b) Del tiempo como factor condicionante

La Justicia no es una carrera de plazo inacabado, porque entonces pierde sentido y el propio proceso deviene injusto.

Tomando nota de esta premisa, que constituye un permanente reproche social y es un nítido indicador del fracaso del sistema escritural, es que los plazos del nuevo Código son escuetos y "perentorios"<sup>(15)</sup> (art. 224, CPPF); prácticamente todo se cuenta en días.

El éxito de las salidas alternativas consiste en que lo que llega a juicio (lo más complejo o de penas elevadas) tendrá pronta fecha de audiencia (cuando en el sistema mixto el atraso es de meses) y la prueba se verterá de forma actuada, no por lectura.

Cuantificado el rendimiento de los procesos en la Oficina Judicial de Salta-Jujuy, resulta que:

- en Salta se resolvieron 861 carpetas, en un promedio de 159 días;
- en Jujuy, 741 carpetas en 143 días;
- en Orán, 323 en 150, y
- en Tartagal, 342 legajos en 184 jornadas.

Datos que hablan por sí solos, no solo de la eficacia del sistema, sino del esfuerzo de sus operadores.

##### c) De una ética del vulnerable



Los dramas que suponen ciertos entornos en los que se produce el delito son captados de inmediato en el marco de las audiencias, tanto en la etapa temprana (al momento de disponer una medida de coerción) como en la intermedia (cuando se homologan acuerdos con pena en modalidad domiciliaria), como si llegaran a juicio (en la determinación de la pena, también considerado en Casación).

A modo de ejemplo de todo este trayecto, vale citar el fallo "Rojas, Blanca Azucena s/recurso de casación", de la Cámara Federal de Casación Penal, de fecha 5/4/2023 (integración unipersonal de Diego G. Barroetaveña), que revocó la decisión del Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta, del 25 de noviembre de 2022 (en plena vigencia del sistema acusatorio), que había condenado a la imputada (perforando el mínimo legal<sup>(16)</sup>) a la pena de 3 años de prisión de ejecución en suspenso y multa mínima de 45 unidades fijas, por resultar penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes en carácter de autora.

En cambio, el casador absolvió a la imputada, en base a observar que Rojas había padecido una sistemática restricción del efectivo cumplimiento de sus derechos sociales, culturales y económicos, vinculándola desde niña con situaciones marginales que aún no ha podido elaborar, por ausencia de una red de contención y acceso a la justicia oportuna. Aquella marginalidad, *"que fue la constante de su existencia, la llevó a que, con su escaso bagaje educativo y simbólico, realice la conducta de transgresión para mejorar las apremiantes condiciones básicas de vida de sus hijos"*. Por ello, concluyó que en el caso se presentó un estado de necesidad "que disculpa" la conducta desarrollada por Rojas y neutraliza el reproche de su injusto [art. 34, inc. 2), CP].

## 2. Aplicar selectivamente el derecho penal

La persecución penal discriminada es cardinal para la eficacia del sistema porque, como se dijo, los canales de disposición de la acción permiten que el Ministerio Público Fiscal persiga mejor lo que ha decidido perseguir: el núcleo criminal "duro". Para ello, en sus filas internas se ha organizado un Área de Atención Inicial que, además de la atención al público, realiza el *primer filtro* de desestimaciones y archivos, luego de lo cual se derivan las causas al área de litigación de casos sencillos o complejos. En los primeros, además, cabe la aplicación de un criterio de oportunidad, todo lo cual también aparece secuenciado en el digesto (arts. 248, 268 y concs., CPPF).

Desde un inicio, entonces, la intervención del acusador público es selectiva y estratégica, procurando que el derecho penal operativo administre los recursos con conciencia de su escasez, a la vez que evite tensionar innecesariamente el sistema carcelario.

## 3. Unidad de análisis judicial

Al igual que existe la Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) en el ámbito del Ministerio Público Fiscal<sup>(17)</sup> y, desde ya, la Comisión Bicameral, es menester la conformación de una mesa en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (como cabeza de Poder del Estado), con participación de los magistrados del Fuero<sup>(18)</sup>, para el abordaje analítico de su marcha y los ajustes o adaptaciones que puedan resultar necesarios. Ello en términos de reglas de actuación, capacitación, cuestiones de organización y personal, etc.

Esta mesa ha de ser transversal, en el sentido de que, conformada también por miembros del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, incluso del Colegio de Abogados (por los defensores particulares), no podrá descuidar el análisis comparativo de lo que ocurre en las distintas jurisdicciones.

En suma, un "workshop" bien conformado y coordinado entre quienes cotidianamente operan el sistema coordinado.

# IV - DEBILIDADES

## 1. Competencia múltiple en los distritos del interior

Resabio de una organización judicial de principios de siglo, los "jueces federales de sección" se hacían cargo de todo el litigio federal de las provincias (civil, contencioso administrativo, laboral y penal), el que surgió de excepción pero fue creciendo a la par que la litigiosidad y la asignación por ley de nuevos asuntos (por ejemplo, los recursos directos contra actos administrativos de universidades nacionales y de registros del automotor) hasta adquirir un volumen notable, que *definitivamente implosionó* en las Cámaras Federales con la derivación, a partir del fallo "Pedraza", de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los litigios previsionales.<sup>(19)</sup>

Así las cosas, que los clásicos jueces de primera y segunda instancia pasen a cumplir roles de garantías y revisión, respectivamente, además del multifuero, y sin descuidar las causas de transición (es decir, aquellas que quedaron del sistema mixto) y los hábeas corpus que siguen regidos por la ley 23098, implica una exigencia insostenible en el tiempo e incongruente desde una mirada global.

*Insostenible* por la exigencia física y mental que supone presenciar y resolver una cantidad de audiencias penales diferentes, y luego también ocuparse de expedientes escritos de toda índole. *Incongruente*, porque avanzamos hacia una justicia humanizada y personalizada en el área penal, pero retrocedemos hacia una mayor delegación, y casi nula presencia y dedicación del juez en el vasto espectro "no penal". Y no es un problema de voluntad, que sobra; es un problema de tiempo físico y de posibilidades humanas reales.

Por si fuera poco, los camaristas federales en el nuevo diseño tienen:

- a) un *doble rol en la etapa intermedia*, en la que revisan las resoluciones de los jueces de garantías y también realizan el control de acusación (art. 279, CPPF), tarea conceptualmente ajena, a punto tal que no hay antecedentes en el derecho comparado, y
- b) la función de revisión de las decisiones de los jueces con rol de ejecución, que hasta ahora ejercía Casación.

## 2. Revisión colegiada de las medidas cautelares

A título personal, entiendo que las medidas de coerción deberían revisarse por los jueces de revisión (valga la redundancia) en forma unipersonal, no de a tres, porque ello permitiría descongestionar la agenda de cada magistrado, a la vez que evitaría los desgastes de su compatibilización, innegable cuando el número de causas toma volumen.

En basamento de esta opinión, no puede negarse que aun cuando la más gravosa de las cautelares es la prisión preventiva, se trata de autos provisorios, y la propia coerción está computada en días que el acusador público o privado debe precisar cuando la pide (art. 223, CPPF). Otra razón es que el propio Código, en el artículo 55, apartado a), permite juicios unipersonales en casos de pena privativa de libertad de hasta quince años<sup>(20)</sup>, es decir que si un solo judicante puede condenar a prisión efectiva y de semejante extensión, es de toda lógica y sentido común que pueda revisar de igual modo las preventivas que tienen los días contados. En tercer lugar, esas condenas unipersonales son revisadas en Casación también en soledad (por un solo casador), en mérito a lo dispuesto en el artículo 54, segundo párrafo, del CPPF.

Completa este marco la circunstancia de que el artículo 53 del CPPF, cuando determina la competencia de los jueces con funciones de revisión, no exige expresamente la colegiación para las cautelares, con lo cual hay espacio legal para la interpretación que propongo.

### 3. Falta de reglamentación integral sobre cuestiones operativas

La diversidad de matices, dudas e inquietudes que supone la gestión operativa y diaria del sistema, propios de su dinámica oral y de los plazos acotados que deben atenderse<sup>(21)</sup>, requiere una reglamentación sistemática y estandarizada, emitida en base a consultas e intercambios, siempre dentro de los contornos legales. Esto, insisto, supone diálogo con los operadores del sistema e involucramiento de la Corte Suprema, que es la indicada para actuar en consecuencia y así evitar la creación de “microsistemas” o “microprácticas” judiciales en cada jurisdicción.

## V - AMENAZAS

### 1. Quedar en soledad

En todo este tiempo, el cronograma progresivo de implementación no avanzó. Es cierto que la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF del Congreso de la Nación estableció, mediante las resoluciones 2/2019 y 1/2020, su continuidad en las jurisdicciones federales de *Mendoza y Rosario*, y que se hicieron estudios y diagnósticos, pero hasta la actualidad no se conoce fecha concreta de inicio.

Siendo innegables las ventajas de una justicia “a otra velocidad”, lo que no está en discusión (más allá de que puedan mejorarse algunos aspectos; por eso justamente el FODA), resulta insólito que a 4 años la foto sea la misma. Y aun cuando en algún futuro no muy lejano el modelo logre arribar definitivamente a los dos distritos mencionados, el ritmo de implementación debe acelerarse.

Es que, más allá de lo disvalioso y desprolijo que supone la coexistencia de dos carriles procesales tan distintos a nivel federal, se plasma una inadmisibles desigualdad en el trato al imputado, que en Salta y Jujuy realmente goza de la garantía a un proceso eficiente, 100% imparcial y con plazo razonable, mientras que en el resto del país debe someterse a un proceso lento y formal, propio de un molde absolutamente agotado, que también lacera a la víctima y a la comunidad, esperanzadas de una respuesta oportuna.

### 2. Amesetamiento de las causas en instancia de recurso extraordinario

De acuerdo al artículo 350 del CPPF (último párrafo), las decisiones de las Cámaras Federales constituyen sentencia definitiva a los fines del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esta previsión, simple y concisa, implica echar por tierra la doctrina del fallo “Di Nunzio”<sup>(22)</sup>, construida por el Alto Tribunal para erigir a Casación como instancia intermedia en el control de constitucionalidad.

De tal suerte, cuando de recurso extraordinario se trata, directamente hay que acudir a la Corte Suprema, lo que así se viene haciendo en la jurisdicción, sinningún pronunciamiento concreto de aquella en los diversos recursos concedidos (tanto respecto de las decisiones de los jueces con funciones de revisión como de los que tienen funciones de juicio) hasta el día en que escribo esta glosa.

Vale decir, entonces, que todo el tiempo que se gana en las etapas anteriores se pierde en el trayecto extraordinario.

Y esto no solo le pesa al imputado cuando persigue la revocación de su condena, sino también al tejido social, cuando confía en que la sentencia se cumpla, porque según el criterio imperante a partir de “Olariaga”<sup>(23)</sup>, no puede considerarse firme (y, por lo tanto, ser ejecutada: art. 375, CPPF) una condena penal respecto de la cual se encuentra pendiente de resolución una queja.

En este escenario, o se agiliza la circulación interna de causas del acusatorio en la Corte Suprema, o se emite un nuevo fallo que aplique el fallo “Di Nunzio” y deje sin efecto el nítido mensaje del artículo 350 del CPPF, que quiso remover el tribunal intermedio para agilizar el arribo de las causas a la Corte, sin suponer que, paradójicamente, en la propia Corte se iban a amesetar.

### 3. Falta de medición social y diálogo interinstitucional

No es novedad que para tener una idea al menos aproximada del éxito o fracaso de las instituciones, hay que medir su rendimiento.

Esto supone, además de las estadísticas (que arrojan data objetiva) un aspecto insoslayable, que ya anticipé al proponer la creación de una mesa de análisis “judicial”, y es el intercambio entre sus propios protagonistas, que debe ser institucional y fluido.

Este diálogo permitirá detectar deficiencias, neutralizar malas prácticas, anticipar problemas y evitar que la falta de comunicación genere cortocircuitos derivados de incidentes menores que, acallados, generen reacciones en base a suposiciones. También, por supuesto, optimizar destrezas y compartir experiencias.

En paralelo, no puede ignorarse la opinión social, como tampoco la de los usuarios externos del sistema. Llama la atención que mediciones como las encuestas de satisfacción, tan arraigadas en las empresas privadas, a menudo se ignoran cuando el evaluado es el prestador de un servicio público, como es la administración de justicia. Canales para hacerlo, varios, desde enviar mails con formularios de opinión hasta los correos web en los que se efectúan las notificaciones electrónicas.

Debemos entender que, como todo proceso de cambio, el sistema acusatorio es una construcción colectiva.

---

## Notas:

(1) Doctora en Derecho (UBA). Especialista en Derecho Penal y Ambiental. Jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta

(2) Ello no obsta que el juez acusatorio cuente con asesores que ingresen con él a la audiencia para tomar notas, o llevar antecedentes, y no implica que no se me malinterprete: desconocer que el trabajo de las Secretarías Penales en el modelo Levene es clave, pero propio de una dinámica agotada

(3) Corte IDH - "Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas" - 30/6/2009 - Serie C - Nº 197 - párr. 68

(4) ONU - Comité de Derechos Humanos - Comunicación Nº 263/1987 - "M. González del Rho vs. Perú" - Doc. ONU CCPR/C/46/D/263. 1987. Párr. 5.2.

(5) Conf. datos oficiales de las estadísticas OFIJU en el segmento mencionado

(6) Lo que he dispuesto en autos "Frías, Matías Rodolfo", de febrero de 2020, "Argañaraz, Domingo Alfredo", y "Cuzzio y Gómez", de junio de 2020; "Arancibia", de agosto de 2020; "Tapia y otros", de setiembre de 2020, "Alcoba", "Salazar y Lescano", y "Rodríguez", de noviembre de 2020; "Castillo", de diciembre de 2020, "Calapeña", de mayo de 2021, "Jorge", de octubre de 2021, "Albez", de abril de 2022, "Randazzo y otros", de agosto de 2022, "Mendoza, Marcos", de octubre de 2022, y "Díaz, Carlos Gustavo s/infracción a la ley 22415" - CFed. Apel. de Salta - Sala I - mayo/2020, por citar algunos de los tantos precedentes en igual sentido de esta jurisdicción

(7) Datos oficiales de OFIJU Salta y Jujuy entre el 10/6/2019 y el 24/2/2023

(8) Ver "Escándalo en Salta: condenaron a cinco concejales por cobrar el IFE durante la pandemia" - Infobae - Crimen y Justicia - 19/5/2022 (<https://www.infobae.com/sociedad/policiales/>) y <https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/salta>, entre otros portales

(9) Registro de Casación FSA 1881/2020/33

(10) <https://www.fiscales.gob.ar/narcocriminalidad/salta>

(11) Carpeta Judicial Nº 688/2021/18

(12) Legajo Casación FSA 6672/2021/13/1

(13) Registro FSA 20361/2019/6

(14) Carpeta Judicial Nº 15031/2022

(15) Aunque hay opiniones acerca de que solo serían perentorios para las partes, mientras ordenatorios para los jueces: *"la razón del disímil tratamiento radica en que la actividad que debe llevarse a cabo para el desarrollo del proceso penal es ineludible y en que, consecuentemente, por virtud de los intereses públicos en juego, no es admisible que caduque o pierda validez por su producción tardía"* (Navarro, Guillermo y Daray, Roberto: "Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial" - Ed. Hammurabi - Bs. As. - 2008 - T. 2 - págs. 454/5). En concordancia, clásicamente se sostuvo que los términos serán perentorios si se han fijado para que se ejerza una simple facultad, por ejemplo, recurrir o producir prueba (cfr. D'Albora, Francisco J.: "Código Procesal Penal de la Nación" - 6a. ed. - Ed. Abeledo-Perrot - Bs. As. - 1993 - T. 1 - pág. 521)

(16) Porque la pena mínima para este delito, de acuerdo al [art. 5, inc. c\), de la L. 23737](#), es de 4 años

(17) R. (PGN) 16/2018

(18) Empezando por los que ya aplican el CPPF

(19) ["Pedraza Héctor Hugo c/Anses s/acción de amparo"](#) - CSJN - 6/5/2014 - Cita digital IUSJU216000D. Allí, el Tribunal Cimero pronunció la inconstitucionalidad del [art. 18 de la L. 24463](#) y dispuso la competencia de las Cámaras Federales de todo el país para agilizar las causas de jubilados; lo que hasta entonces absorbía la Cámara Federal de la Seguridad Social con sede en la Capital Federal

(20) Cosa que ya ocurre con el sistema mixto, con la incorporación del art. 24 bis al Código Levene por la obra de reforma de la [L. 27384](#) (13/9/2017)

(21) Como por ejemplo, administración de recursos físicos, tecnológicos y humanos, programación anticipada de audiencias, criterios de prioridad, manejo de la oficina judicial (guardias pasivas, horario vespertino, etc.), entre muchas otras

(22) Fallos: 328:1108

(23) CSJN - Fallos: 330:2826